

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	: ISABEL CRISTINA VALENCIA PANESSO
DEMANDADO	: FUNDACIÓN LUCHEMOS POR LA VIDA
VINCULADA	: PROTECCIÓN S.A.
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO (AUTO)
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-007-2020-00236-01
RADICADO INTERNO	: 188-23
DECISIÓN	: CONFIRMA AUTO
ACTA NÚMERO	: 247

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a resolver el recurso dentro del auto de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se DECLARE la existencia del contrato de trabajo verbal a término indefinido y la existencia de la relación laboral entre la demandante como trabajadora de la FUNDACIÓN LUCHEMOS POR LA VIDA, desde el 16 de abril de 2019 hasta el 17 de diciembre de 2019; se declare terminada sin justa causa la relación laboral entre las partes, al configurarse un despido indirecto por falta de afiliación a la seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y caja de compensación, jornadas laborales superiores a las permitidas por la ley, no pago de horas extras ni recargos nocturnos, no pago de salarios, auxilio de transporte y prestaciones sociales.

Se le ORDENE a la accionada, el pago de los salarios, horas extras y recargos nocturnos, el auxilio de transporte y las prestaciones sociales dejadas de pagar en toda la relación laboral; al pago de la indemnización por despido sin justa causa por haberse configurado el despido indirecto; al pago de la indemnización del art. 65 del CST; al pago de los aportes a la sociedad PROTECCIÓN S.A con los respectivos intereses de mora; al pago de la indexación y demás derechos laborales probados; se condene en costas procesales a la accionada.

Como supuestos facticos con que sustenta sus pretensiones, narra en síntesis, que la demandante prestó sus servicios personales en calidad de trabajadora, desde el 18 de febrero de 2019 al 15 de abril de 2019; y posteriormente, desde el 16 de abril de 2019 al 17 de diciembre de 2019, a la FUNDACIÓN LUCHEMOS POR LA VIDA; los servicios prestados por la demandante desde el 18 de febrero de 2019 al 15 de abril de 2019, fueron por medio de Contrato de Aprendizaje, y los prestados desde el 16 de abril de 2019 al 17 de diciembre de 2019 fueron mediante contrato verbal a término indefinido; los servicios personales fueron prestados en las dos sedes de la fundación las cuales se encuentran respectivamente en la Finca Tabaco y Ron, vereda El Noral Copacabana - Antioquia y en la Sede El Rosal Hogar del Adulto Mayor, ubicada en la Vía San Pedro, corregimiento de San Cristóbal Medellín-Antioquia, hasta el 17 de diciembre de 2019, fecha en la cual presentó renuncia verbal debido al incumplimiento en el pago de salarios, auxilio de transporte, las jornadas de trabajo superaban el límite máximo establecido en la ley, incumplimiento en el pago de prestaciones sociales, afiliación a Seguridad Social, horas extras y recargos nocturnos; la labor desempeñada era la de auxiliar de gerontología y el horario era en turnos variables de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y 7:00 p.m. a 7:00 a.m.; la demandante estuvo bajo las órdenes y subordinación de la Sra. Sandra Milena González Jaramillo (legal suplente de la citada entidad); el salario devengado era \$40.000 por turno de trabajo.

El 17 de diciembre del 2019, la demandante presentó renuncia verbal a la Sra. Sandra Milena González Jaramillo, por el incumplimiento en las obligaciones legales, excesivas jornadas de trabajo; se indicó los valores adeudados por la FUNDACIÓN LUCHEMOS POR LA VIDA a la terminación del contrato de trabajo; la demandante fue cita el 6 de enero de 2020, por su jefe inmediata, oportunidad que le informó que le pagaría \$ 580.000, con la condición que le

firmara un documento de “terminación por mutuo acuerdo”, a lo que se negó la demandante; en dicho documento se evidencia que la representante legal suplente de la FUNDACIÓN LUCHEMOS POR LA VIDA, reconoce que existió relación laboral entre las partes al utilizar términos como “TRABAJADOR, EMPLEADOR, RENUNCIA A DERECHOS CAUSADOS Y ADQUIRIDOS EN FAVOR DEL TRABAJADOR, y se intenta crearle confusión a la demandante al indicarle que el contrato de era de prestación de servicios; el 24 de febrero de 2020, las partes acudieron a audiencia de conciliación extrajudicial ante el Ministerio del Trabajo, la cual culminó con constancia de no acuerdo conciliatorio.

En audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio y decreto de pruebas, llevada a cabo el 30 de mayo de 2023, el apoderado de la FUNDACIÓN LUCHEMOS POR LA VIDA en la etapa de saneamiento, puso de presente la existencia de la causal de nulidad contemplada en el inciso 5º del art. 121 del CGP, relativo a la pérdida de la competencia, argumentando la misma en que su representada fue notificada hace más de un año y el Despacho a partir de esa actuación, emitió auto del 9 de febrero de 2023, y en ese sentido toda actuación que se realice con violación a la pérdida de competencia es nula.

Al dar traslado a las partes de la nulidad invocada por el apoderado de la FUNDACIÓN LUCHEMOS POR LA VIDA, la parte demandante solicitó no se acceda a la nulidad, por considerar que el proceso se ha desarrollado normalmente y la fijación de la audiencia para el mes de mayo corresponde a la congestión de los despachos judiciales, sin que se pueda aprovechar dicha situación para invocar la nulidad de un proceso como un argumento de defensa. Sustento que es coadyuvado por la apoderada de PROTECCIÓN S.A

El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín no accedió a la nulidad del inciso 5º del art. 121 del CGP, al considerar que no opera la pérdida de la competencia en el proceso laboral, ante la inexistencia de norma laboral que legitime la pérdida de la competencia; además advierte que la Corte Suprema de Justicia ha advertido que dicha norma se reglamenta para el procedimiento civil porque la misma se hizo para un estado que le administra a los jueces las herramientas y personal que hacen inexcusable la mora en las decisiones.

También argumenta su decisión en que el art. 29 de la CP hace referencia al debido proceso y reconoce el principio de legalidad como fundamental en el ejercicio de las funciones judiciales y administrativas, y por ello se deben de observar las formas propias de cada juicio y garantizar las normas que permitan a los administrados actuar bajo garantías y obtener una pronta y cumplida justicia y las actuaciones se encuentren sujetas a la ley; que en materia laboral el art. 145 del CPT y SS determina que la aplicación analógica solo opera a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, y en ese sentido en el evento que las normas del trabajo hubieran establecido una institución y no la hubiera desarrollado se podía acudir a la analogía para su operatividad y eficacia. En consecuencia, la normatividad del trabajo no estableció la pérdida de la competencia como se hizo en materia civil con el art. 121 del CGP. Sustenta su decisión en las sentencias STL 5866 de 2016, SL 9669 de 2017, STL 3395 de 2018 y SL 1163 de 2022.

Además, puso de presente que el despacho no avala actuaciones dilatorias del proceso y que en auto del 21 de julio de 2021 saneó el proceso y ordenó vincular a la sociedad PROTECCIÓN S.A, por lo que no observa que el Despacho arbitrariamente hubiera generado mora judicial, sino que en las actuaciones del proceso se observan conductas diligentes.

IMPUGNACIÓN

El apoderado de la FUNDACIÓN LUCHEMOS POR LA VIDA interpone recurso de apelación, aduciendo que el CGP es la norma general que rige el procedimiento en Colombia, y como el 6 de julio de 2021 se emitió auto donde fijaba audiencia del art. 77 del CPT y SS para el 26 de julio de 2021, y al momento del recurso se está a 30 de mayo de 2023, lo que implica que han transcurrido más de 20 meses; asegura que la parte pasiva no alega que se trate de maniobra dilatoria y tampoco es que no se tenga conciencia de la carga laboral de los despachos judiciales, no obrante la carga judicial no se puede endosar a los usuarios, por lo tanto, en virtud del aforismo “dura lex sed lex” el art. 121 del CGP rige el procedimiento en Colombia, y en materia laboral por interpretación analógica y expresa disposición del CPT y SS se puede aplicar la normatividad del CGP. Asegura que se está violando el derecho fundamental al

debido proceso y por ende se debe acceder a la pérdida de competencia y a la nulidad del CGP.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La apoderada de la parte demandante solicita se confirme la decisión de primera instancia, aduciendo que la nulidad del art. 121 del CGP no es aplicable a los procesos laborales conforme lo señala la sentencia SL 1163 de 2022. Y resalta el interés de la parte accionada de dilatar el proceso.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico a resolver, se centra en determinar si hay lugar a declarar la nulidad por haber perdido la competencia el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín en aplicación del inciso 5º del art. 121 del CGP

Se tiene que el inciso 5º del art. 121 del CGP expresa:

“DURACIÓN DEL PROCESO. ... Excepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar por una sola vez el término para resolver la instancia respectiva, hasta por seis (6) meses más, con explicación de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso. (...)”

Pretende el apoderado de la parte accionada se declare la nulidad por la pérdida de la competencia del Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, al haber transcurrido más de un año de la notificación de la demanda y al emitirse el auto del 9 de febrero de 2023, dicha actuación es nula por la pérdida de competencia en aplicación de la norma transcrita, la cual es aplicable dado que el CGP es la norma general que rige el procedimiento en Colombia y porque en materia laboral por interpretación analógica y expresa disposición del CPT y SS se puede aplicar el CGP.

Solicitud que no será acogida por la Sala, bajo el entendido que el CGP en principio regula asuntos diferentes a los procesos laborales, y así se plasmó en el art. 1º del CGP al señalar *“Este código regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, además, a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de*

particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes.”, y de la misma norma se puede concluir, que excepcionalmente se puede dar su aplicación en materia laboral en los eventos en que las actuaciones no estén reguladas, y esto se logra dando aplicación al art. 145 del CPT y SS.

Siendo así las cosas, como en materia laboral se cuenta con regulación expresa de la materia, ello es, el CST y CPT y SS, es por lo que es esta la normatividad aplicable y solo excepcionalmente se dará aplicación analógica a normas del CGP, y en ese sentido, en materia laboral se cuenta con el art. 48 del CPT y SS por medio del cual se faculta al juez de la dirección del proceso bajo las premisas de garantizar los derechos fundamentales, el equilibrio entre las partes y dar agilidad y rapidez al trámite procesal. Lo que hace que a todas luces sea innecesaria la remisión al CGP.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 1163 de 2022 también se ha pronunciado frente a la inaplicación de los arts. 117 y 121 del CGP en materia laboral en el siguiente sentido:

“Sobre la referida acusación, haciendo la salvedad de que sí es posible acusar la infracción directa por la vía indirecta (CSJ SL 1039-2020), la Sala considera que el Tribunal no incurrió en la infracción directa de los arts. 117 y 121 del CGP, comoquiera que estas disposiciones no son aplicables al procedimiento laboral, toda vez que no se dan los supuestos del art. 145 del CPTSS para acudir por analogía a la aplicación de tales preceptos, ya que el Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social tiene su propia regulación para garantizar a toda persona su derecho «...a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter» (nl. 1° del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

Sin el ánimo de ser exhaustivos en relacionar todos los mecanismos adecuados que prevé el procedimiento del trabajo y seguridad social para brindar las debidas garantías judiciales a las partes, a manera de ejemplo, se rememora que el art. 48 del CPTSS prevé que el juez asumirá la dirección del proceso, adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite. Igualmente, los arts. 30 y 71 ibidem prevé lo que debe hacer el juzgador en caso de que una o ambas partes sean contumaces. Además, está previsto que las actuaciones procesales y la práctica de pruebas en las instancias se

llevarán a cabo oralmente, en audiencia pública, so pena de nulidad, art. 42, ibidem.

En fin, el procedimiento del trabajo y seguridad social tiene sus propios mecanismos adecuados para ofrecer a las partes las garantías judiciales debidas, por lo que no se debe acudir a los arts. 117 y 121 del CGP, puesto que no hay un vacío legal que deba suplirse con estas disposiciones, en tanto que el art. 145 del CPTSS solo autoriza acudir al Código General del Proceso a falta de disposiciones en la especialidad. Inclusive, el mismo art. 1 del CGP reconoce que ese código regula la actividad procesal «en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios» y que se puede aplicar a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, «en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes».

Además, la Sala considera que el legislador, en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, puede adoptar distintas medidas que sean adecuadas para brindar a toda persona las garantías judiciales debidas, atendiendo la especialidad de los derechos sustanciales que van a ser objeto de adjudicación por parte de los jueces, por lo que no necesariamente debe hacerlo de igual forma en todos los casos.”

Por lo expuesto, es que se CONFIRMARÁ la decisión de primera instancia.

Costas en esta instancia a cargo de la FUNDACIÓN LUCHEMOS POR LA VIDA en la suma de \$1.160.000 por no prosperar el recurso de apelación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión emitida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDA: Costas en esta instancia a cargo de la FUNDACIÓN LUCHEMOS POR LA VIDA en la suma de \$1.160.000, por no prosperar el recurso de apelación.

TERCERO: Déjese copia de lo resuelto en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de procedencia.

Lo resuelto se notificará por ESTADOS.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ

Sin firma por ausencia justificada

CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
- SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 151 del 31 de agosto de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>